



José Eugenio Azpiroz y Ramon Jáuregui, ayer, posando con una cruz y la Constitución española, respectivamente. /

JUSTY GARCIA

Políticos, católicos e intelectuales coinciden en la necesidad de renovar el pacto Iglesia-Estado

Consideran imprescindible lograr un acuerdo en materia educativa, aunque disienten al valorar la conveniencia de la trayectoria laicista que sigue el PSOE

JONE GUINDO
SAN SEBASTIAN.- Católicos, intelectuales y políticos de diferente signo coincidieron ayer en la necesidad de que se normalicen las relaciones entre la Iglesia y el Estado y de que ambos poderes trabajen para que se restablezcan los cauces de diálogo que se han bloqueado en los últimos tiempos, con el fin de renovar el pacto que ya alcanzaron en la etapa de la Transición, y que casi 30 años después necesita ser revisado.

Esta es la conclusión a la que llegaron ayer los cuatro ponentes que participaron en el debate sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado organizado en el marco de las VIII Terrazas de Verano, evento que organiza EL MUNDO DEL PAIS VASCO en colaboración con los Cursos de Verano de la UPV, Localía Euskadi y el Hotel María Cristina de San Sebastián, sede de este ciclo de coloquios.

La mesa redonda, moderada por el periodista y articulista del EL MUNDO Mariano Ferrer, contó con la participación de Jesús de las Heras, director de la revista *Ecclesia* y responsable durante doce años de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal; José Eugenio Azpiroz y Ramón Jáuregui, diputados del PP y del PSE-EE en el Congreso de los Diputados, respectivamente; y Javier Otaola, abogado, Defensor del Vecino en Vitoria y co-director del curso *La laicidad: el poder y lo sagrado, ciudadanía y libertad*, al que se dedica

este año el IV Seminario Fernando Buesa de la UPV.

La equiparación de la unión entre homosexuales al matrimonio, el riesgo de que se ningunee la clase de religión en los colegios, la ampliación de los supuestos para abortar, el llamado *divorcio-express*, la posibilidad de permitir la clonación terapéutica de embriones, la polémica sobre la eutanasia que suscitó la película *Mar adentro...* Son muchas las decisiones que está tomando el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero en campos que golpean el núcleo duro de la doctrina de la Iglesia católica. Aunque la distancia entre ambos poderes parece crecer por momentos, están ganando terreno las voces que reivindican que vuelvan a tenderse puentes entre las dos instituciones, según pudo comprobarse en el debate de ayer.

El propio Ramón Jáuregui, representante del PSOE en el colo-

quio, reconoció que su partido tiene «un diálogo pendiente» con la Iglesia. Además, se enorgulleció de liderar la cada vez más numerosa corriente cristiana que hay entre las filas socialistas y aseguró que el PSOE no tiene ninguna intención de marginar la religión mayoritaria en el país.

No obstante, opinó que la jerarquía eclesiástica está haciendo una lectura «sesgada» de las reformas laicistas realizadas por el Gobierno, en la medida que critica con fervor medidas como la del matrimonio gay o la simplificación del trámite del divorcio, pero no valora otras que, a su juicio, coinciden plenamente con su doctrina social, como la retirada de las tropas de Irak y la apuesta por la paz del Ejecutivo de Zapatero, su política de inmigración y su lucha contra fenómenos que están causando un gran daño a los valores que ha defendido tradicionalmente la Iglesia, como la tele-

basura. «Todas estas medidas no han merecido ni un solo comentario, a pesar que demuestran la afinidad que hay entre socialismo y cristianismo», criticó.

Compromiso electoral

Jáuregui dijo que las reformas legislativas realizadas no son sino la plasmación del programa electoral defendido por el PSOE, «un compromiso adquirido con los votantes» que el partido debe llevar a efecto aunque choque con el código moral de la Iglesia.

«Me opongo a los fundamentalismos antirreligiosos, pero también reivindico una mirada más laicista en la gestión del Estado, más aconfesional que la que teníamos hace 30 años. Respeto que la Iglesia exprese su opinión y la considero legítima, pero también pienso que muchas veces va muy por detrás de lo que piensa la sociedad», expuso.

Por su parte, José Eugenio Azpiroz opinó que el grado de tensión alcanzado entre la Iglesia y el Estado es «mayúsculo», lo que «dice muy poco del talante y el carácter dialogante» del presidente del Gobierno. Como ejemplo, se refirió al modo en el que el Ejecutivo ha aprobado «unilateralmente y de sopetón» la reforma de la enseñanza, cuando se suponía que los obispos estaban todavía negociando con la ministra de Educación el modo de enfocar las clases de religión en el nuevo sistema. A este respecto, Jáuregui admitió que es necesario alcanzar un consenso, para que futuros cambios de gobierno no provoquen que se revoque una ley por este polémico tema, lo que haría muy vulnerable una reforma que el sistema educativo «necesita como respirar».

Además, el diputado *popular* sacó a colación el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las preferencias religiosas de los españoles, según el cual el 80% de los ciudadanos se declara católico, y aseguró que «ningún partido puede dar la espalda» a un sector tan amplio de la sociedad.

Azpiroz acusó a Zapatero de romper el consenso alcanzado en la Transición «para superar un pasado traumático» en el que el hecho religioso se convirtió en un arma arrojadiza. Además, defendió la «aconfesionalidad» del Estado que se proclama en la Constitución y la preferencia que se da a la Iglesia católica a la hora de mantener rela-

XXIV CURSOS DE VERANO DE LA UPV  TERRAZAS

ciones con confesiones religiosas, frente al viraje laicista que, a su juicio, pretenden dar los socialistas a la Carta Magna.

«Nuestro modelo no es el francés, que no reconoce el hecho religioso y define al Estado como laico. En España se acordó establecer un modelo aconfesional que no se decanta por ninguna religión, pero reconoce todas y establece un principio de cooperación preferente con la católica», resumió.

Turbulencia

Contra su punto de vista, Javier Otaola consideró un «despropósito» la influencia que todavía tiene la Iglesia sobre la sociedad civil, hasta el punto que «sigue pareciendo normal» que el jefe de Gobierno cumpla con la tradición de asistir a determinados eventos religiosos y además «soportar con estoicismo la reprimenda que acostumbra dedicarle el obispo de turno en el sermón».

Otaola reivindicó la «autonomía del discurso político y la razón dialogada en la gestión de la ciudad», una tarea que «no puede estar fundada en principios heterónomos» como los que pueden defender los seguidores de una determinada religión. «Como decía Pascal, la fe es una apuesta, y como tal tiene un factor de incertidumbre y de opción intuitiva que nadie puede exigir que compartan personas ajenas a la misma», subrayó.

El abogado, que se inició en la masonería hace más de dos décadas, aseguró que el pulso que mantienen la Iglesia y el Estado es fruto de la «tendencia a expandirse que tiene

JESUS DE LAS HERAS

«La Iglesia no quiere privilegios, sino poder ocupar el espacio que le corresponde porque así lo demanda un buen número de ciudadanos» «La soberanía popular no está custodiada por 350 diputados que aprietan un botón»

JOSE EUGENIO AZPIROZ

«Para superar un pasado traumático en el que la religión fue un arma arrojadiza, en España se acordó establecer un modelo aconfesional que no se decanta por ninguna confesión, pero que un principio de cooperación preferente con la católica»

RAMON JAUREGUI

«En el PSOE tenemos un diálogo pendiente con la Iglesia» «Me opongo a los fundamentalismos antirreligiosos, pero también reivindico una mirada más laicista en la gestión del Estado, más aconfesional que la que teníamos hace 30 años»

JAVIER OTAOLA

«La fe es una apuesta, y como tal tiene un factor de incertidumbre y de opción intuitiva que nadie puede exigir que compartan personas ajenas a la misma» «Es irrenunciable que el Estado no subsidie ni sostenga ningún culto»

cualquier poder hasta que alcanza un tope». «La relación actual es relativamente problemática. No hay que dramatizarla, porque ha habido momento mucho más tensos y contradictorios. Yo diría que es una pequeña turbulencia en un viaje transatlántico, que no va a afectar a la estabilidad de los pasajeros», comparó.

El letrado reconoció que en España «no cabe establecer una laicidad a la francesa», pero es «irrenunciable que no se

vencione ni se sostenga ningún culto, salvo que haya un objeto de interés común» que justifique mantener cierta relación económica, como puede ser la conservación del patrimonio o la realización de una determinada labor social.

Lejos de la opinión de Otaola, Jesús de las Heras aseguró que la Iglesia tiene «todo el derecho» a reivindicar su espacio en la sociedad, en la medida que es respaldada por un buen número de fieles, como

comprobarse en los dos referendums a los que se somete» esta institución cada año, cuando los ciudadanos tienen que decidir a qué organismo destinan una parte de su IRPF o al decantarse por la clase de religión para sus hijos. «Debe quedar claro que la Iglesia no busca poder ni privilegios, sino evitar desequilibrios y ejercer libremente su misión, haciéndose oír sin estridencias y ocupando el espacio

la sociedad porque así lo demanda un sector importante de la misma», planteó.

De las Heras censuró la tendencia que tiene la clase política a arrogarse todo el poder. «La soberanía popular no está custodiada por 350 diputados que aprietan un botón», aseveró. En lo relativo a la cuestión de la financiación, el sacerdote dijo que «a la Iglesia no se le está dando nada gratis» y lamentó que no se reconozca más la gran labor social que realiza.

En este punto, Jauregui intervino para mostrar su reconocimiento a la contribución que realiza la Iglesia en este campo, lo que a su juicio es una «razón más que suficiente para que no se corten las relaciones» entre esta institución y el Gobierno. «Nadie puede negar la tremenda labor complementaria que hacen los cristianos en materia de acción social. A mí me gusta decir que representan varios de los tentáculos del pulpo del Estado del Bienestar», ilustró.

Sin embargo, el diputado socialista negó que el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado responda a un «choque de legitimidades» entre el Ejecutivo del PSOE y esta institución. «Estamos en una democracia y aquí manda el parlamento. El código de la Iglesia es muy respetable, pero no estamos en un Estado teocéntrico», declaró el diputado, que calificó de «intromisión en la ley democrática» las dos últimas pastorales del recientemente fallecido Juan Pablo II, en las que el Papa criticaba ciertos modos de hacer política en el mundo. «Pienso que transmiten una concepción no suficientemente democrática del juego de poderes Iglesia-Estado», sostuvo.



Javier Otaola y Jesús de las Heras, ayer, momentos antes de iniciarse el debate sobre las relaciones Iglesia-Estado. / J. G.